

Arica, trece de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

En la causa RUC N° 2001284114-1, RIT N° 399-2021 y Rol Corte N° 141-2022, por los delitos de robo con violencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, la Defensora Penal Pública, doña Cintia Cartagena Martínez, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia pronunciada el ocho de marzo recién pasado por una de sus salas, por la que fue condenado el imputado Guillermo Arboleda Lozano a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo y accesorias legales en calidad de autor de dos delitos de robo con violencia, previstos en el artículo 432 y sancionados en el artículo 436 inciso primero, ambos del Código Penal, cometidos en esta ciudad el 27 de noviembre y 22 de diciembre de 2020.

La recurrente sustentó su recurso en la causal establecida en el artículo 374 letra e) con relación al artículo 342 letra c) y 297 todos del Código Procesal Penal.

El trece de abril pasado se efectuó la vista de este recurso con la asistencia de la abogada de la Defensoría Penal Pública y del representante del Ministerio Público, quedando la causa en acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el citado recurso la defensa del condenado solicitó la nulidad de la sentencia y del juicio oral en que recayó, en virtud de la causal esgrimida del artículo 374 letra e) en relación con el 342 letra c) y artículo 297, todos del Código Procesal Penal, únicamente circunscrita al “hecho 2” por el que fue acusado su representado, la que, en síntesis, hizo consistir en que en la sentencia se infringió el “principio lógico de razón suficiente: Corroboración”, al haber condenado a su representado como autor de ese delito de robo con violencia sin que la víctima haya visto a los hechores, no pudo reconocerlos y sin constatación de lesiones, vulnerando de este modo el artículo 297 del Código Procesal Penal inciso primero y última parte del inciso tercero, lo que hace imposible, dijo, la reproducción del razonamiento usado por los jueces para arribar a la decisión de condena, ya que en su construcción vulneraron las normas de valoración de la prueba. Ponderaron parcial y sesgadamente algunos medios probatorios, especialmente los dichos de los testigos al contrainterrogarlos,



infringiendo con ello el “principio lógico derivado de la razón suficiente denominado de Corroboración” específicamente en lo que toca a la participación que le cupo a su defendido en el hecho N°2, que reprodujo.

Luego de transcribir el considerando vigésimo de la sentencia, señaló que la víctima no vio el rostro de quienes la atacaron, pero al llegar a su hogar le contó a su pareja lo sucedido, quien salió en su persecución y habría forcejeado con uno de ellos, así como que uno de los sujetos mantenía la cartera de su pareja, que llamó a su celular y escuchó el sonido que provenía de ese sujeto y luego se dieron a la fuga. Ambos testigos estuvieron contestes en que los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 2020, pero la denuncia se cursó al día siguiente; que terceros les informaron que quien estaba realizando estos asaltos era El Chinga, les sugirieron no dar aviso a la policía, ya que se ocuparían de recuperar las especies y que fueran a buscar los documentos al cementerio, lugar en que estos sujetos solían botar especies.

La sentencia recoge que la víctima no participó del reconocimiento, dado que no vio el rostro de quienes la atacaron, pero sí lo hizo su pareja, en términos que el Chinga era el mismo sujeto que participó en los hechos, unido al hecho, no corroborado, que un tiempo después este sujeto habría ingresado a su casa, ocasión en que logró verle el rostro y frustrar la sustracción de especies. Y luego reprodujo la declaración de los funcionarios policiales Pedro Luis Tello Mancilla y Luis Valencia Miranda, consignadas en el motivo sexto de la sentencia.

Que cuestionó la participación de su defendido, pues fueron los venezolanos quienes proporcionaron su individualización a víctima y testigo y no se ha acreditado que su defendido haya ingresado con posterioridad a su domicilio, ocasión en que la víctima habría logrado reconocerlo, de todo lo que concluyó que no existe corroboración de la participación de su representado en este Hecho 2, pero sí una inducción por parte de los datos proporcionados por el grupo de venezolanos.

Enfatizó que el reconocimiento que realizó el testigo, pareja de la víctima, lo fue de un kárdex en que se incorporan fotografías de otras fuentes, lo que cuestionó en juicio.

Esta falta de corroboración alcanza también a la existencia de violencia, reproduciendo luego el considerando décimo cuarto de la sentencia –en el que



tribunal desestimó su tesis absolutoria- en el que no se señalaron los medios en que sustentaron la entidad y fecha de las lesiones, por tratarse de malos tratamientos de obra. La ley exige que ellas se acrediten, no que los jueces las concluyan en base a presunciones y declaraciones poco precisas de los testigos y este yerro ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues ha conducido a los juzgadores a tener por acreditada su participación en este ilícito y condenarlo, en circunstancias que debió ser absuelto y terminó solicitando se acoja el recurso deducido y se declare la nulidad del juicio oral y de la sentencia, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordene la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

SEGUNDO: Que, previo al análisis del recurso, cabe tener presente que el llamado “principio de corroboración”, en realidad no es un principio, sino que un criterio de valoración de prueba específico, aceptado por la jurisprudencia y que suele exigirse en los casos de testimonio de víctima e imputado. Es decir, en aquellas situaciones en que la impugnación se sostiene en poner en entredicho que pueda condenarse con una única fuente de prueba que no estaría corroborada.

TERCERO: Que, este denominado “principio de corroboración” no atañe a la estructura formal de la sentencia ni al principio de razón suficiente, dado que se relaciona más bien con el estándar probatorio, esto es, con el umbral que es necesario superar para vencer la presunción de inocencia. De igual modo, resulta útil precisar que la corroboración tampoco impone como condición necesaria para la condena, la multiplicidad de medios de prueba “directos” -como parece requerir el recurso-, sino que se refiere a una exigencia diferente que dice relación con la necesidad de contar con elementos probatorios de confirmación. En efecto, se ha señalado que: “...corroborar es reforzar el valor probatorio del aserto de un testigo relativo al hecho principal de la causa, mediante la aportación de datos de una fuente distinta, referidos no directamente a ese hecho, sino a alguna circunstancia que guarda relación con él, cuya constatación confirmaría la veracidad de lo declarado por el primero.”(Perfecto Andrés Ibáñez, “Prueba y Convicción Judicial en el Proceso Penal”, Hammurabi, 2009, p. 125).



CUARTO: Que, con relación al motivo de nulidad en análisis, no está de más recordar que el medio recursivo propuesto implica que los hechos establecidos por el tribunal de la instancia y la valoración o ponderación de los medios probatorios en virtud de los cuales arribó a su convicción, son inamovibles en esta sede jurisdiccional, como quiera que en el presente recurso esta Corte se erige como un tribunal de nulidad y, en tanto tal, pasa a ser “juez de legalidad” y jamás “juez de mérito”, lo que significa que el control se reduce -en lo referente al motivo de invalidación invocado- a la estructura racional del juicio o discurso valorativo formulado por los jueces del ad quo y en virtud del cual arribaron a la conclusión que es discutida.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la participación del encausado, el análisis de la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral y el establecimiento de los hechos que se dieron por probados, basta revisar los considerandos duodécimo y décimo tercero de la sentencia impugnada para percatarse que los sentenciadores del tribunal a quo cumplieron satisfactoriamente con la exigencia del artículo 297 del Código Procesal Penal, teniendo presente que valoraron toda la prueba producida, dieron efectivo cumplimiento al requisitos de fundabilidad y además, el método lógico que emplearon en la construcción argumental, permitiendo la reproducción del razonamiento que utilizaron para llegar a la convicción de condena que se reclama en el recurso.

Así, en tales acápites los sentenciadores analizaron las declaraciones de los testigos que allí singularizaron, que se concatenan naturalmente unas con otras, sin contradicción alguna y permiten complementar o llenar los vacíos que pudieran advertirse del testimonio de la víctima, especialmente con la del testigo H.H.H., quien el día de los hechos salió en persecución de los asaltantes, dándoles alcance, sorprenderlos con la cartera de la víctima y luego reconoció a uno de ellos de un set fotográfico y luego en el juicio, adquiriendo en base a ellas la convicción que sobrepasa la duda razonable, existiendo de este modo corroboración periférica del relato de la ofendida, excluyendo, consecuentemente la ausencia de corroboración denunciada.

SEXTO: Y, en lo que toca al principio de corroboración – o falta de él, según se denunció en el recurso- y que afincó en una valoración parcial y sesgada de algunos medios de prueba, específicamente en lo relativo a los dichos de los



testigos al ser contrainterrogados –que no individualizó, por cierto-, además de no decir relación con el enunciado normativo propuesto, sin embargo, examinado el considerando sexto, sólo los testigos concernientes al hecho 2 –único por el que se dedujo el presente recurso- solamente los testigos 2, 6 y 10 fueron contrainterrogados por la defensa y del contenido de sus respuestas no aparece disonancia alguna con las conclusiones a que arribaron los jueces y que el recurrente tampoco señaló.

Y en un segundo capítulo –idéntico al planteado como tesis absolutoria durante el juicio- consistente en la ausencia de medios de prueba que dieran fe de la existencia de lesiones, baste la lectura del considerando décimo cuarto para excluir el yerro denunciado en el recurso, pues, al contrario de lo sostenido en el libelo, en la especie, la violencia consistió en malos tratamientos de obra que tuvieron por finalidad impedirle a la víctima repeler el robo, por lo que no la circunscribieron únicamente a la existencia de lesiones físicas, amparados en lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal, unido a la precisión que del elemento violencia o intimidación vertieron en el considerando décimo noveno del laudo y, por último, ninguna de las preguntas dirigidas por la defensa a los testigos señalados en el párrafo anterior dijeron relación con la existencia de tales lesiones, como afirmó en su libelo, de modo que ellas no pueden servir de sustento a la tesis planteada en el recurso.

SÉPTIMO: De esta manera, entonces, la sentencia definitiva en comento cumplió con los requisitos legales de fundabilidad y razonabilidad, sin que el discurso valorativo empleado en ella por el tribunal oral haya traspasado los límites de la lógica de razón suficiente, razón por la cual la causal de nulidad absoluta en comento será desestimada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 374 y 384 del Código Procesal Penal, se declara:

Que **se rechaza**, el recurso de nulidad enderezado por la Defensora Penal Pública doña Cintia Cartagena Martínez en contra de la sentencia definitiva de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, la que, en consecuencia, **no es nula**, como tampoco el juicio oral que la precedió.



Léase en la audiencia fijada para el día de hoy y sin perjuicio notifíquese por el estado diario.

No firma el Ministro Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa se encuentra habiendo uso de permiso conforme lo establece el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese vía interconexión.

Rol 141-2022 Penal.





HNXHZKXNTE

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por Ministra Claudia Florencia Eugenia Arenas G. y Fiscal Judicial Juan Manuel Escobar S. Arica, trece de mayo de dos mil veintidós.

En Arica, a trece de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

